



Asunto: Armamento extraviado o sustraído.

Nº Expte.: 001-018360.

Fecha: 26/12/2017.

Con fecha 02/11/2017 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001-018360.

Con fecha 17/11/2017 esta solicitud se determinó que la competencia correspondía al ámbito del Ejército de Tierra en representación del resto de Fuerzas Armadas, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes, previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Con fecha 13/12/17, con fundamento en lo dispuesto en el art. 20.1 de la citada Ley, se acordó ampliar el plazo máximo de un mes por otro mes, fruto del volumen y complejidad de la información requerida, y notificar al solicitante.

En dicha solicitud se requería lo siguiente:

*"Me gustaría conocer el número de armas del Ejército extraviadas, perdidas, sustraídas o robadas, etc. cada año en la última década. Si fuera posible, me gustaría obtener, con el máximo nivel de detalle posible, la situación de cada caso, como por ejemplo: cuerpo o unidad, base, localidad, provincia, país, misión, tipo de arma, coste de reposición, etc.*

*También me gustaría saber si existe algún tipo de sanción para estos supuestos. En caso afirmativo, me gustaría conocer el régimen sancionador para estos casos y, si fuera posible (y de forma anonimizada), el número de militares sancionados, cuerpo o unidad, y las sanciones apercibidas. Además, ajustándome a la posibilidad de entregar esta información o su existencia, me gustaría saber si existen militares que hayan sido sancionados en varias ocasiones por los motivos mencionados."*



Una vez analizada la solicitud, y recabada la información disponible en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor del Ejército resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por la Fundación Ciudadana Civio (NIF G86361862):

Respecto a la primera parte de la información solicitada, este centro directivo tiene constancia de un total de veintidós sucesos relacionados con el extravío/perdida/sustracción/robo de armamento en las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones, durante la última década, fechándose el último de estos incidentes en el primer semestre de 2016.

La cantidad total de armamento de las Fuerzas Armadas afectada por estos sucesos representa una nimia cuantía en relación a las existencias totales de las Fuerzas Armadas.

Es necesario señalar que no se puede ampliar la información relativa a los citados sucesos ya que estarían sujetos a lo dispuesto por La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (LSO), al estar clasificados los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos a "sustracciones y pérdidas de armamento, munición y material", por Directivas de clasificación "*Relaciones de documentación y material clasificado*" emitidas por la Juntas de Jefes de Estado Mayor, en reuniones de 20 de agosto y 1 de octubre de 1981 y 5 de marzo de 1982 (Dichas Relaciones se editaron como apéndice de la Orden Ministerial comunicada 1/1982 por la que se aprueban las Normas para la protección de la documentación y material clasificado).

Referente a la segunda parte de la información solicitada, las posibles faltas que pudiese cometer un componente de las Fuerzas Armadas en este tipo de supuestos se encuentran tipificadas en la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (Artículos 7 y 8 del Capítulo I del Título I), y las posibles sanciones a las que se expondría serían las reflejadas en el Capítulo II de la misma Ley.

Asimismo, el militar implicado en estos supuestos podría incurrir en un posible delito, según lo establecido en los artículos 78 y 82 del Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, siendo las penas asociadas a estos supuestos delitos las reflejadas en el citado Código.

El anterior Código Penal Militar, vigente hasta la entrada en vigor del actual, y que fue aprobado por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, tipificaba estas supuestas acciones de acuerdo con los preceptos establecidos en sus artículos 195, 196 y 197.



Los veintidós sucesos citados, relacionados con el extravío/perdida/sustracción/robo de armamento en las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones, durante la última década, acarrearán un análisis individualizado de los mismos, generando el correspondiente expediente, y siendo estos resueltos en la forma y manera que estimó oportuna la autoridad competente en cada uno de los incidentes.

Se significa que no se pueden ampliar los detalles asociados a las penas y sanciones impuestas en los incidentes citados ya que están clasificadas las sanciones de personal militar, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, e igualmente sujetas a la LSO.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

EL GENERAL SEGUNDO JEME



- Miguel José Martín Bernardi -

